

C.A. de Santiago

Santiago, trece de junio de dos mil veinticuatro.

Vistos y teniendo presente:

1º) Comparece Hernán Figueroa García, en representación de **Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique** -en adelante, la CMDS de Iquique-, deduciendo acción constitucional de protección en contra del **Consejo Nacional de Televisión** -en adelante, el CNTV-, respecto del acto arbitrario e ilegal por el cual el recurrido, mediante Ordinario N°297, modificó la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital otorgada por 20 años mediante Resolución Exenta N° 432 del año 2017 a favor de la CMDS de Iquique, perturbando y contraviniendo las garantías constitucionales consagradas en los números 2, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando se ordene a la recurrida dejar sin efecto cualquier resolución o acto administrativo que desconozca la concesión otorgada en el año 2017.

En cuanto a los hechos, expone que la CMDS de Iquique es actualmente propietaria de la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital, entregada por 20 años, en el año 2017, correspondiente a la frecuencia Canal 26, con denominación “RTC Televisión”, con una orientación programática que se centra en la promoción del quehacer comunal a través de noticias, programas culturales, servicio social, cobertura de los deportes regionales, programación educativa y de salud, además de cumplir una misión de comunicación de alertas y emergencias, respecto de la situación del borde costero, ante riesgos de tsunamis.

Indica que la referida concesión, fue adjudicada mediante concurso público de acuerdo al artículo 15 de la Ley N° 18.838



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FEGJXXWCNCE

que crea el CNTV, y otorgada mediante Resolución Exenta N° 20 del 12 de agosto de 1997, por un plazo inicial de 25 años.

Que con la entrada en vigencia de la Ley N° 20.750 sobre televisión digital terrestre, se inició una contienda judicial entre ambas partes, debido a la negativa de la recurrida de tramitar la solicitud de modificación de concesión de radiodifusión de carácter analógica a digital, lo que derivó en una acción de protección que fue acogido por la Excma. Corte Suprema, Rol N° 97.695-2017, debiendo la recurrida tramitar la solicitud de modificación de la concesión a una de carácter digital, solicitud que fue acogida finalmente por el CNTV, con fecha 17 de julio de 2017, modificando la concesión de radiodifusión a una digital, por el plazo de 20 años, en Resolución Exenta N° 432 del 03 de agosto de ese año.

Indica que para realizar este cambio, la Ley N° 20.750 señalaba que el solicitante debía contar con los medios tecnológicos necesarios a fin de lograr la cobertura digital del 100% de la concesión, por lo que la recurrente debió realizar una importante inversión económica, gastando desde el año 2018 a la fecha, la suma de \$148.083.530, por compras de equipos tecnológicos, honorarios, y otros; mientras que por concepto de pago de remuneraciones de los trabajadores, desde el mismo año a la fecha, ha incurrido en un gasto de \$2.406.350.634.

Que en cuanto al acto arbitrario, señala que a raíz de una presentación realizada por la CMDS de Iquique ante el CNTV, en el marco del concurso público de concesionarios que deberán ser incorporados a la parrilla programática del permisionario de servicios limitados de televisión “Claro Comunicaciones S.A.”, la recurrida dictó la Resolución Exenta N°963 de fecha 12 de octubre de 2023, por la cual revocó y puso término a su concesión



de radiodifusión televisiva, siendo por tanto, un acto arbitrario e ilegal, pues tuvo por no presentada para todos los efectos legales, la postulación de la recurrente al concurso público de concesionarios que deberán ser incorporados a la parrilla programática de Claro Comunicaciones S.A., señalando expresamente que: *“Que, en la actualidad, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique no es titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, en atención a que su concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital terminó por vencimiento del plazo, puesto que su vigencia se extendía hasta el 16 de octubre de 2022”*.

Al respecto, refiere que la resolución recurrida reconoce la existencia de una concesión a favor de la CMDS de Iquique por un período de 20 años, desde el año 2017, pero luego señala en el considerando 18, que mediante Ordinario N° 297 del 21 de marzo de 2018, se complementó la resolución de 2017, en el sentido de indicar que la concesión otorgada era por el tiempo que restare para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital y no por un período de 20 años, lo que habría sido notificado a su representada por carta certificada, refiriendo aquella, que es falso, pues dicho Ordinario jamás ingresó a la oficina de partes de la Corporación Municipal, como lo certifica el encargado de la oficina de partes en documento que se acompaña al recurso.

Indica que es recién, con fecha 12 de octubre de 2023, que la CMDS de Iquique toma conocimiento, a través de la Resolución impugnada, de que su concesión se encuentra extinta por vencimiento de plazo. Que prueba de esto, es que a la fecha, ha existido un permanente intercambio de correspondencia entre la



CMDs de Iquique y el CNTV, quien, ejerciendo su facultad fiscalizadora, todos los meses le solicita la información relativa a la “programación cultural”.

Se aclara que el acto impugnado, no es la Resolución Exenta N°963/2023 en cuanto tuvo por no presentada la postulación al concurso público de la parrilla programática del permisionario Claro Comunicaciones S.A.; sino que, se recurre de protección respecto del actuar ilegal y arbitrario mediante el cual el CNTV le puso término a la concesión de su representada, de lo cual solo tomó conocimiento a través de la Resolución ya referida, mediante la declaración formal contenida en el considerando N°22, el cual señala: *“Que, en la actualidad, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique no es titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción...”*; modificando la Resolución Exenta N°432/2017, en cuanto a su vigencia, encontrándose por tanto extinta hoy para la recurrida.

Indica que el actuar del CNTV resulta evidentemente arbitrario e ilegal, toda vez que si lo que buscaba era modificar, revocar o invalidar la concesión otorgada el año 2017, debió ceñirse estrictamente a alguno de los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, lo cual no aconteció en los hechos, ya que como la propia recurrida señala, ésta habría “complementado” la Resolución Exenta N°432/2017, a través de la dictación del Ordinario N°297/2018, sin que conste el inicio de un proceso de invalidación, debiendo reunirse en sesión a fin de adoptar un acuerdo específico respecto de la materia, y no en forma general, como lo reconoció la recurrida, pues se habría reunido el consejo en sesión de enero 2018, adoptando un



acuerdo de carácter general, oficializándolo en un mero Oficio Ordinario.

Que en cuanto a las garantías vulneradas, refiere que con su actuar, el CNTV ha afectado el derecho de propiedad amparado en el N°24 del artículo 19 de la Constitución, pues ha desconocido expresamente la concesión de la recurrente, vulnerando también, la garantía de igualdad ante la ley y debido proceso, al complementar un acto administrativo mediante un procedimiento totalmente irregular y al margen de la Ley N° 19.880.

Agrega que el CNTV yerra en la interpretación de los artículos transitorios de la Ley N° 20.750, que introdujo la televisión digital terrestre, pues aplica el artículo 3° transitorio para fundamentar el otorgamiento de concesiones de migración solo por el tiempo restante para el vencimiento del plazo original, proceso que no se aplica a la concesión de su representada, pues era concesionaria en banda UHF y no en banda VHF, que es a lo que se refiere dicho artículo. Luego, respecto de los concesionarios de banda UHF, lo que hizo el mencionado artículo fue darles la opción de modificar sus concesiones para migrar a la tecnología digital, no siendo aplicable esta reducción de la vigencia de la concesión.

Por lo expuesto, solicita se acoja el presente recurso, y se ordene al CNTV la inmediata dictación de la resolución que deje sin efecto cualquier acto administrativo que desconozca la concesión otorgada mediante Resolución Exenta N°432/2017, en especial, lo señalado en la Resolución Exenta N°963 de 2023 en cuanto a desconocer la vigencia de la concesión otorgada mediante Resolución Exenta N°432 del año 2017, sin perjuicio de las providencias que esta Corte estime pertinentes, con expresa



condena en costas.

2º) Informa al tenor del recurso, Ignacio Rojo Leyton, en representación del CNTV, solicitando el rechazo con costas de la acción constitucional.

En primer lugar, expone latamente las funciones del CNTV, el ámbito de su competencia, explica el concurso de “must carry” o retransmisión obligatoria, el sistema concesional de radiodifusión televisiva de libre recepción en Chile y la concesión de radiodifusión televisiva.

En cuanto a los hechos objeto de la acción de protección, señala que mediante Ordinario N° 297 del 21 de marzo de 2018, se complementó la Resolución Exenta N° 432 del 2017, en el sentido que la concesión de la CMDS de Iquique se otorgaba por el tiempo que restare para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital, y no por el plazo de 20 años, resolución que según la recurrente, no le habría sido notificada. Refiere que dicho argumento debe ser desestimado, en atención que el documento fue debida y legamente notificado mediante Carta Certificada al representante legal de la CMDS de Iquique, siendo ingresado a la oficina de Correos de Chile con fecha 26 de marzo de 2018, no siendo tal acto administrativo impugnado en sede administrativa o judicial, por lo que se entiende que goza de la presunción de legalidad señalada en el artículo 3° de la Ley N° 19.880, lo cual consta según captura de pantalla que acompaña en el informe, por lo que el presente recurso resulta extemporáneo.

En cuanto a la naturaleza jurídica de la decisión del CNTV comunicada en Ordinario N° 297 del año 2018, señala que las alegaciones del recurrente deben ser desestimadas, en atención a que tanto el acuerdo de la sesión de Consejo de fecha 23 de



enero de 2018, como el Ordinario, constituyen para todos los efectos legales, “actos administrativos”, que en nada cambian la decisión de fondo adoptada sobre el plazo de vigencia de la concesión de radiodifusión televisiva. Agrega que lo importante, desde el punto de vista del derecho administrativo, es el fondo y no la forma, en atención a que el elemento esencial para identificar un acto administrativo es si el acto en cuestión contiene una decisión, esto es una declaración de voluntad adoptada en ejercicio de una potestad pública y que produce efectos jurídicos directos, independiente de la forma en que se adopten dichos actos, lo cual ha sido ratificado en jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema (Rol N° 12.668-2022).

En ese contexto, tanto la decisión acordada en la sesión de Consejo de fecha 23 de enero de 2018, como el Ordinario CNTV N° 297 constituyen actos administrativos, por cuanto se adopta una decisión sobre un asunto determinado, adoptando el Consejo un acuerdo específico, esto es, sobre la vigencia de las concesiones otorgadas con anterioridad a la Ley N° 19.131 y las otorgadas con posterioridad a dicha ley, acordando “complementar” las resoluciones de migración, señalando que dicha concesión se debe otorgar por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión, decisión que también involucraba a la referida Corporación Municipal, dictándose posteriormente el correspondiente acto administrativo de complementación y notificándose debidamente dicho acto mediante carta certificada.

Finalmente, expone, no resulta admisible calificar el acto del Consejo como ilegal o arbitrario por no aplicarse alguno de los procedimientos establecidos en la Ley N° 19.880, considerando que los actos administrativos gozan de plena presunción de



legalidad, no pudiendo el CNTV invalidar el acto administrativo al no existir vicio ilegalidad alguno, operando asimismo el plazo de caducidad de 2 años para invalidar un acto administrativo.

En lo tocante a la supuesta errónea interpretación respecto de los artículos transitorios de la Ley N° 20.750 sobre Televisión Digital Terrestre, señala que el argumento de la recurrente no se aviene a una interpretación armónica y sistemática de la normativa, por lo que el Consejo, en la sesión ya referida, acordó que todas aquellas concesiones otorgadas o transferidas con posterioridad a esa fecha, no estableció una diferenciación de las concesiones de carácter analógico, independiente de la frecuencias, pues por el contrario, si se modificaba la concesión de la referida Corporación con un período de vigencia de 20 años, la concesión mutaría a una nueva y no sería modificación propiamente tal.

Por tanto, reitera el rechazo del presente arbitrio, por no existir ilegalidad o arbitrariedad, con costas.

3°) El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

4°) Para el adecuado análisis y resolución de la acción sometida a decisión de esta Corte, conviene reproducir los hechos sobre los que no recae controversia, y que además constan en los antecedentes allegados al presente proceso:

1.- Mediante Resolución Exenta N° 20 de 12 de agosto de



1997, del CNTV, se otorgó a la CMDS de Iquique una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción en la banda UHF, para la ciudad de Iquique, canal 26, por 25 años.

2.- El Ordinario N° 744 de 27 de julio de 2016 del CNTV resolvió no tramitar la Solicitud de Migración presentada por la CMDS de Iquique, de Televisión Analógica a la Televisión Digital, en atención a que las corporaciones municipales no pueden ser titulares de concesiones y que la incompatibilidad es aplicable a las nuevas concesiones, de conformidad al artículo 3° transitorio, inciso 4° y, artículo 18 inciso segundo de la Ley N° 20.750 del año 2014.

3.- La Corte Suprema, en causa Rol N° 97.695-2016, con fecha 20 de marzo de 2017, acoge una acción de protección deducida por la CMDS de Iquique contra el CNTV, ordenando a esta última tramitar la solicitud de modificación de la concesión a una de carácter digital, por cuanto la prohibición del artículo 18 de la Ley N° 18.838 en su texto posterior a la entrada en vigencia de la Ley N° 20.750 para otorgar concesiones a corporaciones municipales sólo opera respecto de nuevas concesiones, que no era el caso de la CMDS de Iquique, que era titular de una concesión en banda UHF desde 1997, rigiéndose su situación entonces por lo previsto en el artículo 2° transitorio, inciso 6°, de la Ley N° 20.750, que señala que “quienes fueren titulares de una concesión televisiva de libre recepción en la banda UHF al momento de entrada en vigencia de la modificación al Plan de Radiodifusión Televisiva tendrán un plazo máximo de veinticuatro meses, a contar de tal fecha, para lograr la cobertura digital del 100% de las concesiones de que sean titulares, dentro del cual deberán requerir las modificaciones de sus concesiones con medios propios en la misma banda que fueren necesarias para el



cumplimiento de lo señalado en el presente inciso”.

4.- Con fecha 3 de agosto de 2017, mediante Resolución Exenta N° 432, el CNTV dio cumplimiento al citado fallo, modificando la concesión de radiodifusión a una digital, por el plazo de 20 años,

5.- El CNTV, en sesión de fecha 23 de enero de 2018, en el punto 9), cuyo epígrafe es “SOLICITUD DE COMPAÑÍA CHILENA DE TELEVISION S.A.”, en la que se trata la consulta de Compañía Chilena de Televisión S.A. “acerca de la necesidad de realizar alguna gestión especial para continuar con las transmisiones analógicas correspondientes al simulcasting hasta que se produzca el apagón analógico”, acordó que: “De conformidad con lo que dispone el artículo 5° transitorio de la Ley N°20.750, en relación con el artículo 3° transitorio de la Ley N° 19.131, con relación al proceso de migración digital, se precisa que todas aquellas concesiones de Radiodifusión Televisiva de Libre Recepción analógicas otorgadas con anterioridad al día 08 de abril de 1992, fecha de publicación de la Ley N°19.131, las nuevas concesiones para la migración a tecnología digital se otorgarán por el plazo 20 años, y todas aquellas otorgadas o transferidas con posterioridad a esa fecha, la concesión para migración se otorgará por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital.

En consecuencia, en lo que respecta a las concesiones de reemplazo ya otorgadas, *se complementarán* las resoluciones de migración señalando que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital.”

6.- El 21 de marzo de 2018, el Secretario General (S) del



CNTV suscribe el Ordinario N° 297, dirigido al “REPRESENTANTE LEGAL COMUNICACIONES SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE”, Ordinario que contiene los siguientes considerandos: “1. Por acuerdo de Sesión de Consejo de fecha 23 de enero de 2018, se dispuso, que en aquellos casos en que fuera procedente, se complementarían las resoluciones de migración o de reemplazo, ya otorgadas, señalando que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital. 2. Sobre la Base de lo que dispone el artículo 5° transitorio de la Ley N°20.750, en relación con el artículo 3° transitorio de la Ley N° 19.131, con relación al proceso de migración digital, se precisó que, respecto de todas aquellas concesiones de Radiodifusión Televisiva de Libre Recepción Analógicas, otorgadas con anterioridad al día 08 de abril de 1992, fecha de publicación de la Ley N°19.131, las nuevas concesiones para la migración a tecnología digital se otorgarán por el plazo 20 años, y todas aquellas concesiones otorgadas o transferidas con posterioridad a esa fecha, la concesión para migración se otorgará por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital. 3. En consecuencia, *complementése* la Resolución Exenta CNTV N°432 de 2017, en el sentido que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital.”

7.- En forma previa a alcanzar el acuerdo y dictar el ordinario descritos en los numerales 5 y 6 precedentes, respectivamente, el CNTV no informó a la CMDS de Iquique, directamente o a través de alguna publicación, que en la sesión de 23 de enero de 2018 se discutiría la modificación del plazo de



las concesiones otorgadas con posterioridad al día 08 de abril de 1992, fecha de publicación de la Ley N° 19.131, supuesto que comprende a la actora.

8.- Con fecha 26 de marzo de 2018, el Ordinario N° 297 fue ingresado a la oficina de Correos de Chile, dirigido al “REPRESENTANTE LEGAL COMUNICACIONES SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE”.

9.- El CNTV, mediante Resolución Exenta N° 152 del 26 de febrero de 2021, aprobó las Bases de llamado a concurso para la localidad de Iquique (Canal 26), publicándose en el Diario Oficial los días 19, 25 y 31 de marzo de 2021. Dicho concurso fue declarado desierto, por ausencia de postulaciones, en sesión de Consejo de fecha 23 de agosto de 2021.

10.- Con fecha 12 de octubre de 2023, el CNTV dictó la Resolución Exenta N° 963, con la que tuvo por no presentada para todos los efectos legales, la postulación de la CMDS de Iquique al concurso público de concesionarios que deberán ser incorporados a la parrilla programática de Claro Comunicaciones S.A., señalando que: *“en la actualidad, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique no es titular de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, en atención a que su concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción de carácter digital terminó por vencimiento del plazo, puesto que su vigencia se extendía hasta el 16 de octubre de 2022”*.

5º) El acto en el que se centra el reproche de arbitrariedad e ilegalidad que formula la CMDS de Iquique, corresponde al Ordinario N° 297 de 21 de marzo de 2018 dictado por el CNTV que habría modificado la concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital otorgada por 20 años mediante Resolución Exenta N°432 del año 2017 a favor de la CMDS de Iquique,



modificación que habría consistido en fijar como plazo el restante de su concesión original.

La mentada Resolución Exenta N° 432, como acto administrativo, según lo establece el artículo 3° de la Ley N° 19.880, goza de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, desde su entrada en vigencia, autorizando su ejecución de oficio por la autoridad administrativa y, en consecuencia, sólo puede ser revisada, impugnada o invalidada por las vías previstas en la ley.

6°) La modificación del plazo de una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción, de 20 años a, en este caso, aproximadamente 5 años (tiempo que restaba desde la Resolución Exenta N° 432 de 2017, hasta el año 2022 correspondiente al vencimiento del lapso original de 25 años contado desde 1997), constituye una alteración sustancial, medular y esencial de la Resolución Exenta N° 432, de 17 de julio de 2017, pues la implementación, mantención y operación de este tipo de concesiones, necesariamente demanda la inversión de importantes recursos -en este caso públicos- así como la contratación de personal para su actividad -como efectivamente ocurrió según dio cuenta la recurrente-, lo que precisamente es concordante con que la duración de la concesión originalmente se haya otorgado por 25 años, y en el año 2017 por 20 años.

Por consiguiente, cuando se alteró el plazo de la concesión se cambió o mudó la esencia de la Resolución Exenta N° 432 de 2017 y, por eso, el acuerdo del Consejo y el Ordinario N° 297 de 2018, en realidad no buscan “complementarla”, pues complementar es simplemente “añadir” a una cosa una cualidad o circunstancia para hacerla íntegra o perfecta, pero en el caso de marras en cambio, se sustituye un elemento central o cardinal del



acto por otro.

7º) El mero etiquetamiento o la denominación de un acto administrativo por la que se incline un órgano de la Administración no puede ser determinante para estos efectos, sino que lo es la misma naturaleza del acto.

Lo contrario supondría aceptar que los órganos de la Administración del Estado podrían desentenderse y soslayar sus actos administrativos previos revestidos de una presunción de legalidad, de estimar a su mera discreción que los mismos adolecen de algún vicio, sin ceñirse a procedimiento formal y reglado alguno para así declararlo, sin oír a los afectados y desconociendo sus derechos adquiridos, simplemente afirmándolo en los actos administrativos posteriores, con la consiguiente incertidumbre jurídica que tal postulado conlleva, tal como se vislumbra en el caso en examen.

8º) Lo que el CNTV denomina “complementación” no se ajusta a la aclaración del acto administrativo que trata el artículo 62 de la Ley N° 19.880, que engloba sólo “cuestiones *de hecho* ostensibles e indiscutibles” (Ponce de León, S., Jurisdicción contencioso-administrativa, Santiago, Der, 2018, p. 31), pues la modificación del plazo de la concesión no respondió a un mero error de copia, de referencia o de cálculo numérico, sino derechamente un cambio de criterio en la interpretación y aplicación de la normativa que rige la materia, como lo evidencia la simple lectura de los motivos consignados en el acta del Consejo de 23 de enero de 2018, reproducidos en el N° 5 del considerando 4º *at supra*.

9º) Tampoco puede postularse que mediante el Ordinario N° 297 el CNTV ejerció la potestad revocatoria respecto de la Resolución Exenta N° 432 de 2017, pues es un extremo de la



revocación la existencia de un acto válido y perfecto y, en razón de ello, es que el ejercicio de la potestad revocatoria tiene efecto sólo hacia el futuro -*ex nunc*-, porque previo a la revocación el acto es perfecto, esto es, válido ante el derecho (Ponce de León, *ob. cit.*, p. 19).

En el caso de marras, al contrario, el CNTV, según se lee en las actas de la sesión de enero de 2018, estimó que el otorgamiento de la concesión a la CMDS de Iquique por 20 años contraviene el artículo 5° transitorio de la Ley N° 20.750, en relación con el artículo 3° transitorio de la Ley N° 19.131 y, por ende, desconoce su validez en ese aspecto, por ser contrario al ordenamiento jurídico.

A mayor abundamiento, lo previsto en la letra a) del artículo 61 también torna improcedente ese acto de *contrario imperio*, desde que aquella Resolución N° 432, en cuanto “dispone modificar la concesión (...) por el plazo de 20 años”, corresponde a un acto declarativo o creador de derechos adquiridos legítimamente por parte de la CMDS de Iquique, al tratarse de un acto de efectos particulares de contenido favorable a un particular.

10°) En ese orden, para llevar a cabo la pretendida modificación de la Resolución Exenta N° 432 de 17 de julio de 2017, al CNTV sólo restaba invalidarla parcialmente en lo atinente al plazo de la concesión otorgada, acudiendo para ello a la potestad invalidatoria reglada en el artículo 53 de la Ley N° 19.880.

La invalidación “[e]s el acto de contrario imperio dictado por la autoridad administrativa competente a través del cual se deja sin efecto otro acto de igual naturaleza que se encuentra viciado de ilegalidad.

Su fundamento se halla en el deber que tiene todo órgano



del Estado, y dentro de ellos, todo órgano de la Administración del Estado, de conformar su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella (...)

La invalidación constituye una nulidad declarada en sede administrativa y, como tal, comparte las características propias de la eficacia de ese tipo de actos, esto es: produce efectos *erga omnes*, porque el acto es expulsado del ordenamiento jurídico con carácter general. Asimismo, opera con efecto *ex tunc* o retroactivo” (Ponce de León, *ob. cit.*, pp. 20-21).

11º) El artículo 53 de la Ley N° 19.880 establece una formalidad esencial para el acto invalidatorio, al señalar que la autoridad administrativa podrá, de oficio o a petición de parte, invalidar los actos contrarios a derecho, “previa audiencia del interesado”.

En virtud de esta limitación para el ejercicio de la potestad invalidatoria “es necesario oír a quienes puedan verse afectados con la invalidación del acto” (Corte Suprema, Rol N° 251.304-2023, de 7 de mayo de 2024).

Tal exigencia de audiencia previa del interesado “vela por el derecho fundamental a ser oído en el procedimiento invalidatorio, que no sólo comprende la facultad de formular alegaciones, sino la garantía completa de contradictoriedad, incluido el derecho a proponer y practicar pruebas (artículo 10 de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 19 N° 3 de la CPR).

Por tratarse de un trámite esencial del procedimiento, su ausencia u omisión priva al particular de su derecho a recurrir posteriormente en juicio sumario del acto respectivo” (Ponce de León, *ob. cit.*, p. 21)

Según el inciso 2º del artículo 18 de la Ley N° 19.880, el procedimiento administrativo consta de las etapas de iniciación,



instrucción y finalización y, engarzando esa norma con el citado artículo 53, el procedimiento administrativo invalidatorio debe entonces forzosamente incluir, como parte de su instrucción, una instancia en la que el interesado o afectado con la eventual invalidación sea oído, incluyendo la posibilidad de aportar prueba en contra de ese propósito.

No está de más consignar que, de conformidad al N° 2 del artículo 21 de la Ley N° 19.880, debe considerarse interesado en ese procedimiento invalidatorio a “Los que, sin haber iniciado el procedimiento, tengan derechos que puedan resultar afectados por la decisión que en el mismo se adopte”, calidad que indudablemente posee la CMDS de Iquique.

12°) Resulta un suceso indubitado que el acuerdo adoptado en el Consejo que sesionó en enero de 2018 como el Ordinario N° 297 de marzo del mismo año, no fueron precedidos de audiencia de la CMDS de Iquique, la que no fue oída de modo alguno pese a que sería directa y gravemente afectada por la invalidación parcial de la Resolución Exenta N° 432 de 2017, con lo cual se le privó igualmente de la posibilidad de rendir prueba para avalar su oposición a la invalidación y, especialmente, de la posibilidad de impugnar ante los Tribunales de Justicia, en procedimiento breve y sumario, el acto invalidatorio aparentemente constituido por el Ordinario N° 297, todo lo cual contraviene el mencionado artículo 53.

13°) Lo razonado hasta ahora, empero, no conduce indefectiblemente a invalidar el Ordinario N° 297 a la luz del principio de conservación del acto administrativo.

A partir del artículo 13 de la Ley N° 19.880, tanto en doctrina como en jurisprudencia, se han ido delineando los denominados principios de trascendencia y conservación del acto



administrativo, los cuales, sin desconocer el principio de legalidad y sus implicancias, suponen que un acto administrativo no puede desaparecer o extinguirse sus efectos a causa de cualquier vicio. Lo anterior, que se encuentra relacionado con la presunción de legalidad de los actos administrativos, se justificaría en la idea de que la nulidad de un acto administrativo es una sanción y, en consecuencia, debe estar supeditada al principio de proporcionalidad (Huepe, F., Morales, B. y Santibáñez, F., Vicios del acto administrativo, Santiago, Der, 2019, pp. 75-76)

14°) En el caso *sub judice*, y en aplicación de los comentados principios de trascendencia y conservación, es posible subsanar los perjuicios que acarrea el vicio en análisis sin necesidad de anular el Ordinario N° 297, por la vía de conceptuar, reputar o entender que este no es el acto terminal de un procedimiento de invalidación sino, al revés, el que le da inicio según el artículo 28 de la Ley N° 19.880, que materializa el “acuerdo de iniciación” (a que alude el artículo 29) adoptado previamente en la sesión del CNTV de 23 de enero de 2018.

La misma naturaleza y peculiaridad del Ordinario N° 297 ampara esta interpretación, como se demostrará a continuación.

15°) El CNTV, en sesión de 23 de enero de 2018, acordó que “se *complementarán*” las resoluciones de migración señalando que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital.

Por tratarse el CNTV de un órgano administrativo pluripersonal, sus acuerdos, según el artículo 3° de la Ley N° 19.880, se llevan a efecto por medio de “*resoluciones* de la *autoridad ejecutiva* de la entidad correspondiente”.

En consonancia, el artículo 14 bis letra c) de la Ley N°



18.838, que Crea el Consejo Nacional de Televisión, prescribe que “El Presidente del Consejo Nacional de Televisión dirigirá la institución y, como tal, tendrá las siguientes funciones y atribuciones: c) *Hacer cumplir los acuerdos del Consejo* en la forma señalada en el reglamento, como asimismo, las sanciones que aquél determine aplicar.”

Con todo, a continuación de la sesión de enero de 2018, el entonces Presidente del CNTV no dicta resolución alguna para hacer cumplir el acuerdo del Consejo, sino que el Secretario General (S) del CNTV -quien según el artículo 3° de la Ley N° 18.838 es “ministro de fe respecto de las actuaciones del Consejo, y tendrá las demás facultades y atribuciones que el Consejo le designe, *siempre que no sean de carácter administrativo*”- suscribe un Ordinario N° 297 con fecha 21 de marzo de 2018, en el que, como parte de sus considerandos, únicamente indica “*complementese*” la Resolución Exenta CNTV N°432 de 2017, en el sentido que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital.

16°) Reafirma el distanciamiento del Ordinario N° 297 de los preceptos legales examinados en el basamento anterior, que impide considerar que a través del mismo se dio cumplimiento al acuerdo de la sesión de enero de 2018, su cotejo con los actos administrativos que le preceden sobre la misma materia.

La Resolución N° 20 de 12 de agosto de 1997 y la Resolución Exenta N° 432 de 3 de agosto de 2017, ambas contienen una parte resolutive -“resuelvo.”-, en la que expresan dar cumplimiento a sendos previos acuerdos de Sesión de Consejo, y disponen respectivamente otorgar la concesión para establecer, operar y explotar un canal de televisión, y modificar la



concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital por el plazo de 20 años, respectivamente, suscritas las dos, por los entonces Presidentes del CNTV.

En contraste, y como se dijo, el Ordinario N° 297 es suscrito por el Secretario General (S) del CNTV; y no tiene sección dispositiva, sino meros considerandos que reproducen el acuerdo del Consejo de enero de 2018 y, por ende, nada dispone, en lo que interesa no resuelve dar cumplimiento por su intermedio a algún acuerdo del CNTV, sino simplemente, después de transcribir el acuerdo del Consejo, agrega “En consecuencia, *complementése* la Resolución Exenta CNTV N°432 de 2017, en el sentido que dicha concesión se otorga por el tiempo que reste para el vencimiento del plazo original de la concesión transformada de analógica a digital”, utilizando una conjugación imperativa, de algo que debe hacerse, a diferencia de la fórmula “cúmplase el acuerdo de Sesión de Consejo (...) que dispone complementar”, según los enunciados usuales a que echa mano la Administración y que concretamente usó antes el CNTV en las referidas resoluciones de 1997 y 2017, así como en otras allegadas en este proceso.

17°) Por los motivos expuestos no puede catalogarse el Ordinario N° 297 como el acto terminal de un procedimiento invalidatorio, ni tampoco puede considerarse que por su intermedio, aun de manera irregular, se hubiese invalidado la Resolución N° 432 de 2017 en cumplimiento de lo acordado por el CNTV.

Ratifica esta conclusión las mismas actuaciones posteriores del CNTV.

Dejando de lado las anomalías analizadas arriba, si el Ordinario N° 297 correspondiera a un acto terminal de un



procedimiento invalidatorio respecto de la Resolución Exenta N° 432 del 2017, ello supondría que aquel acto -el Ordinario N° 297-, conforme al artículo 3° de la Ley N° 19.880, gozaba de una presunción de legalidad, de imperio y exigibilidad frente a sus destinatarios, autorizando al CNTV su ejecución de oficio.

En tal sentido, el CNTV era la primera autoridad administrativa obligada a dar cumplimiento y exigir la observancia de su propio acto administrativo.

En cambio, y en ostensible antagonismo, la CMDS de Iquique explicó que “desde el año 2018 (data del ordinario 297) a la fecha, ha existido un permanente intercambio de correspondencia entre mi representada y el Consejo Nacional de Televisión. En efecto, el Consejo, ejerciendo su facultad fiscalizadora, todos los meses le solicita a mi representada la información relativa a la ‘programación cultural’, lo cual ha sido informado todos los meses hasta la fecha, reconociendo expresamente el propio consejo nacional de televisión en sus informes de cumplimiento, que mi representada ‘Cormudesi RTC’ ha enviado lo solicitado. Dichos informes de cumplimiento se pueden descargar desde la propia página web del Consejo Nacional, en el siguiente link: <https://cntv.cl/estudios-y-estadisticas/informes-culturales-2/>”

En respaldo de su reclamo, la CMDS de Iquique acompañó antecedentes que demuestran que en el año 2023 el CNTV seguía *solicitando* a aquella información de su programación cultural, tal como se lee bajo el epígrafe “SITUACIÓN DE LOS CANALES REGIONALES”, contenido en el “Informe de Cumplimiento, Normativa Cultural, *Concesionarios* y *Permisarios* de Alcance Nacional, *Período fiscalizado Junio de 2023*” acompañado.



Tal situación no fue negada por el CNTV y se trata por ende de un evento incontestable.

18°) En el informe reseñado se fiscalizan a *concesionarios* de señales televisivas, y obviamente concesiones *vigentes*, entre otras, la de que es titular la CMDS de Iquique, lo que resulta inconciliable con la dictación y presunción de legalidad de un acto terminal del procedimiento invalidatorio recaído sobre la Resolución Exenta N° 432, lo que corrobora que el Ordinario N° 297 es suscrito por el Secretario General del CNTV, como ministro de fe del mismo, únicamente con el objeto de dar noticia mediante su notificación a la CMDS de Iquique, del principio de ese procedimiento, y no para poner término al mismo en ejecución del acuerdo alcanzado en la sesión de enero de 2018, lo que únicamente podría haber sido realizado por el Presidente del CNTV.

19°) Por otra parte, el acuerdo de iniciación de un procedimiento de invalidación alcanzado en la sesión de 23 de enero de 2018 por el CNTV y que se formalizó para su comunicación mediante el Ordinario N° 297, ni siquiera fue notificado a la CMDS de Iquique para el ejercicio de su derecho a ser oído, como tantas veces se ha insistido.

Aun cuando hay antecedentes que demuestran que con fecha 26 de marzo de 2018 fue ingresado el Ordinario N° 297 a la Oficina de Correos de Chile para su notificación por carta certificada, lo que de conformidad al artículo 46 de la Ley N° 19.880 en su texto vigente a la sazón, importa que esa notificación se entiende practicada “a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”, esa presunción simplemente legal desde luego que puede ser desvirtuada, demostrando que la notificación ocurrió en



fecha distinta, como se probó en la especie.

Al respecto, los actos propios del CNTV reseñados en el motivo 17° *ut supra*, que no puede ignorar ni desconocer, a lo que se suma que el Ordinario N° 297 va dirigido al representante de “COMUNICACIONES SOCIALES DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE” y no de la “CORPORACIÓN MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE IQUIQUE”, titular de la concesión que la recurrida busca modificar en su extensión, avalan y permiten tener como hecho cierto que no fue puesto en conocimiento del representante legal de la CMDS de Iquique el acuerdo del CNTV de enero de 2018 ni el Ordinario N° 297 de marzo del mismo año, suficiente para desvirtuar la presunción simplemente legal del mencionado artículo 46.

20°) Recapitulando, mediante el Ordinario N° 297 el Secretario General del CNTV deja constancia del inicio de un procedimiento invalidatorio de la Resolución N° 432, pero se omite su notificación al interesado -la CMDS de Iquique- y, en consecuencia, no prosigue ese procedimiento hasta dictar el acto terminal correspondiente.

Cabe apuntar que lo asentado antes permite desestimar la alegación de extemporaneidad del presente recurso de protección formulada por el CNTV, puesto que, respecto del Ordinario N° 297 habría operado una notificación tácita del artículo 47 en contra de la CMDS de Iquique recién con la interposición del presente recurso de protección con fecha 25 de octubre de 2023.

21°) Corolario de que no se haya dictado acto terminal en el procedimiento invalidatorio iniciado mediante el Ordinario N° 297, es que carece de validez la Resolución Exenta N° 963 de 2023, por haber resuelto la postulación de la CMDS de Iquique al concurso público de concesionarios que deberán ser incorporados



a la parrilla programática de Claro Comunicaciones S.A., bajo el supuesto erróneo de la rescisión de la Resolución Exenta N° 432 de 3 de agosto de 2017, en circunstancias que, como se ha dicho, hasta el día de hoy el procedimiento empezado con tal objeto no ha concluido.

22°) Así las cosas, el CNTV, con la dictación de la Resolución Exenta N° 963 de 2023 ha vulnerado el derecho de propiedad de la CMDS de Iquique amparado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución, pues resolvió su postulación al concurso público de concesionarios que deberán ser incorporados a la parrilla programática de Claro Comunicaciones S.A., desconociendo la presunción de legalidad de que está revestida la Resolución N° 432 que le otorgó una concesión de radiodifusión televisiva de libre recepción digital otorgada por 20 años, presunción cuya vigencia no puede ignorarse mientras esa resolución no sea invalidada mediante el procedimiento iniciado con dicho objeto por el Ordinario N° 297 de 2018 o por otra vía legalmente reconocida.

Atendidos los argumentos expuestos, la presente acción constitucional será acogida y se adoptarán las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho que se indicarán en lo dispositivo del presente fallo.

23°) Todo lo que se discurre y decide en la presente resolución, no empece a que el CNTV continúe el procedimiento invalidatorio iniciado mediante el Ordinario N° 297, cuya notificación debe entenderse realizada al menos tácitamente con la interposición por la CMDS de Iquique del presente recurso de protección, atendido que la invalidación de actos contrarios a derecho o al ordenamiento jurídico -como tacha el CNTV recurrido la Resolución N° 432- es un deber de la Administración.



En dicho procedimiento invalidatorio, los interesados, como la CMDS de Iquique y terceros, podrán discutir la misma legalidad de su continuación así como los límites al ejercicio de esa potestad, pudiendo, en su caso, lo decidido ser impugnado ante los tribunales ordinarios conforme al inciso final del artículo 53, en juicio sumario.

Por estas consideraciones, y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excm. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, **se acoge, sin costas**, la acción constitucional deducida en representación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique en contra del Consejo Nacional de Televisión, sólo en cuanto se declara que:

I.- El Ordinario N° 297 de 21 de marzo de 2018 suscrito por el Secretario General (s) del Consejo Nacional de Televisión sólo constituye una constancia del inicio del procedimiento de invalidación de la Resolución Exenta N° 432 de 3 de agosto de 2017 del mismo Consejo Nacional de Televisión.

II.- Se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 963, fecha 12 de octubre de 2023, dictada por el Consejo Nacional de Televisión, debiendo esta institución volver a pronunciarse sobre la postulación de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique al concurso público de must carry respecto del permisionario de servicios limitados de televisión “CLARO COMUNICACIONES S.A”.

III.- La facultad del Consejo Nacional de Televisión para continuar la tramitación del procedimiento invalidatorio de la Resolución Exenta N° 432 de 2017, iniciado mediante el Ordinario N° 297 de 2018, deberá discutirse y dirimirse en ese mismo procedimiento, en su caso.



Se previene que el abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo concurre al acuerdo y sus motivaciones, con excepción de los considerandos trece, catorce y veintitrés, párrafo segundo y los resolutivos I y III, habiendo sido de la opinión, en su lugar, de declarar derechamente la ilegalidad del Ordinario N° 297 de 2018, por omisión de la previa audiencia al interesado que dispone el artículo 53 de la Ley N°19.880 y ordenar en consecuencia, retrotraer el proceso invalidatorio al estado de notificar dicha audiencia obligatoria por parte del CNTV.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del ministro suplente Manuel Rodríguez Vega.

N°Protección-15996-2023.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FEGJXXWCNCE

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Mireya Eugenia López M., Ministro Suplente Manuel Esteban Rodríguez V. y Abogado Integrante Luis Hernandez O. Santiago, trece de junio de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a trece de junio de dos mil veinticuatro, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.



Este documento tiene firma electrónica
y su original puede ser validado en
<http://verificadoc.pjud.cl>

Código: FEGJXXWCNCE